

# Los ingenieros técnicos industriales ante la indefinición del Proceso de Bolonia

## El COITI de Alicante apuesta por un plan de estudios con cursos comunes y especializaciones

Si existe un problema para que las ingenierías en España se adapten al Proceso de Bolonia es sin duda las atribuciones profesionales. España se adhirió a este proceso voluntariamente y parece que, hasta el momento, los distintos gobiernos no han sabido, o no se han atrevido, a llevar a cabo la total adaptación. Como ingenieros técnicos intentaremos presentar cómo está la situación en estos momentos.

Antes de nada, es fundamental entender qué es eso de las atribuciones. Determinados trabajos técnicos llevan consigo unos riesgos para la sociedad y, en este sentido, la sociedad otorga a los profesionales unas atribuciones que les permiten desarrollar estas actividades, evitando los posibles daños que pudiesen acarrear, no sólo a la seguridad de las personas, sino también a su confortabilidad. Atribuciones que, no podemos olvidar, deben establecerse según la ley, como indica la Constitución.

Desde este punto de vista, se hace razonable la existencia de las atribuciones profesionales. El problema de éstas radica en que su reglamentación varía de un país a otro.

En España es la ley la que concede las atribuciones profesionales en función de las necesidades de la sociedad, y esta misma sociedad es la que impulsa al Ministerio de Educación a formar a los profesionales para que sean capaces de dar respuesta a dichas necesidades. En otros países, son las

Asociaciones Profesionales las que capacitan a los ingenieros, dándoles la facultad de ejercer sobre las distintas ramas de la ingeniería.

Así pues, entendemos que un profesional formado en un estado firmante de los acuerdos de Bolonia y con unas atribuciones en su estado de formación, podrá también desarrollar su trabajo en otro estado de la Unión Europea. En este sentido, no se puede permitir que un ingeniero técnico español no tenga el mismo trato que su homólogo europeo.

**"Entendemos que un profesional formado en un estado firmante de los acuerdos de Bolonia y con unas atribuciones en su estado de formación, podrá también desarrollar su trabajo en otro estado de la Unión Europea"**

Según la sentencia del 9 de diciembre de 1999 del Tribunal de Luxemburgo, sala segunda, la decisión de la Comisión Europea de no admitir en el Grupo A de funcionarios a un ingeniero técnico español fue anulada, condenando además a la Comisión Europea al pago de las costas del procedimiento. Y es el propio Estado Español el responsable de hechos como éste, al no permitir que

puedan presentarse los técnicos españoles con una formación semejante a la de algunos países de la Unión Europea.

En este punto, debemos tener en cuenta que fue la propia sociedad quien creó los estudios técnicos para formar en principio a sus funcionarios, quienes, posteriormente, pondrían los conocimientos adquiridos al servicio de la sociedad. Hasta bien entrada la mitad del siglo XX muchos profesionales, al salir de las Escuelas Técnicas, ingresaban directamente en el ministerio correspondiente como funcionarios.

Con el tiempo, el número de profesionales que cada año se titulan es cada vez mayor, así como la complejidad de los trabajos que deben llevar a cabo. En este sentido, ha llegado un momento en que no sólo ofrecen su trabajo a la sociedad mediante la función pública, sino también dan respuesta a los particulares que requieren de sus servicios; estas personas o entidades valoran que sea un facultativo quien firme, y corrobore los trabajos que desean realizar, o bien están obligados por ley a hacer uso de estos profesionales.

En el momento actual en que nos encontramos, de proceso de conversión hacia los acuerdos de Bolonia, existen problemas no con los estudios, sino con las atribuciones de las que hemos estado hablando. Por lo que se va intuyendo, parece ser que se

pretende anular la Ley de Atribuciones de los Ingenieros Técnicos 2/82 (la única que trata íntegramente el tema y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado), por el atajo de crear infinidad de carreras técnicas y darles atribuciones, también repartidas infinitamente. Esto supondrá que posiblemente para un mismo trabajo hagan falta dos o más ingenieros de grado, o un "súper ingeniero, con un gran paraguas" quien, por haber estudiado uno o dos años más, esté suficientemente preparado para asumir por sí solo las atribuciones de los distintos ingenieros de grado.

Este hecho implicaría que cada una de las diferentes especialidades técnicas no tendrían reflejo en la sociedad, así como la existencia de un gran número de estudios universitarios para los que, suponemos, no habrán suficientes alumnos, los que provocaría su desaparición.

La realidad es que la sociedad reclama ingenieros generalistas, que sean fácilmente reconocibles y reciclables respondiendo así a los numerosos cambios que acontecen en nuestra sociedad. Además, debemos optimizar los recursos destinados a la formación y conseguir que, con el menor coste posible (en años y euros), la universidad ofrezca la formación requerida por la sociedad en cada momento.

Desde nuestro punto de vista, una buena alternativa sería la unificación

de los primeros años de estudios entre las distintas especialidades. En la rama del conocimiento técnico que nos ocupa, se deberían incluir dos años comunes para todos, lo cual permitiría a los alumnos elegir más tarde su especialidad (forestal agrícola, industrial, obras públicas, aeronáutica, informática, minas topografía, etc.). En el tercer año de estudios se elegiría la especialidad de acuerdo con la actividad profesional elegida y teniendo en cuenta las atribuciones de la Ley 12/86. El cuarto año sería de especialidad académica, que en nuestro caso bien podrían ser las tradicionales de mecánica, electricidad, electrónica, química y textil, así como las de nueva creación: organización industrial, diseño industrial, etc.

De esta manera los alumnos podrían obtener la base de los estudios en un gran número de campus, ya que sería común a todos. En cuanto a las especialidades profesionales, cada escuela se centraría en unas determinadas enseñanzas y ofrecerían además, los másteres de investigación y especialización relacionados con ellas. Así se produciría una racionalización de los recursos que la sociedad destina a la formación.

**JUNTA DE GOBIERNO DEL  
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  
TECNICOS INDUSTRIALES  
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE**



ros y empresarios del sector agroindustrial, son los dos grandes retos de futuro que se presentan en el sector agrario valenciano.

nomos está siendo clave para conseguir un mayor ahorro de agua".

**Nuevos retos**  
Otra de las cuestiones que

cho que aportar, ya que estamos presentes en todas las fases del proceso de producción y podemos mejorar la rentabilidad".

[www.coial.org](http://www.coial.org)

tres asuntos que aseguró que iba a abordar a lo largo de la presente legislatura: la Prescripción Enfermera, el desarrollo de las Especialidades de Enfermería y el impulso de nuevas competencias.

(Matrona y Salud Mental) están desarrolladas, mientras que las otras cinco (Cuidados Médico-Quirúrgicos, Familiar y Comunitaria, Pediatría, Geriátrica, Enfermería del Trabajo) han quedado

para asumir más responsabilidades, "fundamentalmente, en el primer nivel de asistencia sanitaria, que es la atención primaria", según ha señalado el presidente del CECOVA.

# Los ingenieros técnicos industriales ante la indefinición del Proceso de Bolonia

## El COITI de Alicante apuesta por un plan de estudios con cursos comunes y especializaciones

Si existe un problema para que las ingenierías en España se adapten al Proceso de Bolonia es sin duda las atribuciones profesionales. España se adhirió a este proceso voluntariamente y parece que, hasta el momento, los distintos gobiernos no han sabido, o no se han atrevido, a llevar a cabo la total adaptación. Como ingenieros técnicos intentaremos presentar cómo está la situación en estos momentos.

Antes de nada, es fundamental entender qué es eso de las atribuciones. Determinados trabajos técnicos llevan consigo unos riesgos para la sociedad y, en este sentido, la sociedad otorga a los profesionales unas atribuciones que les permiten desarrollar estas actividades, evitando los posibles daños que pudiesen acarrear, no sólo a la seguridad de las personas, sino también a su confortabilidad. Atribuciones que, no podemos olvidar, deben establecerse según la ley, como indica la Constitución.

Desde este punto de vista, se hace razonable la existencia de las atribuciones profesionales. El problema de éstas radica en que su reglamentación varía de un país a otro.

En España es la ley la que concede las atribuciones profesionales en función de las necesidades de la sociedad, y esta misma sociedad es la que impulsa al Ministerio de Educación a formar a los profesionales para que sean capaces de dar respuesta a dichas necesidades.

En otros países, son las Asociaciones Profesionales las que capacitan a los ingenieros, dándoles la facultad de ejercer sobre las distintas ramas de la ingeniería.

Así pues, entendemos que un profesional formado en un estado firmante de los acuerdos de Bolonia y con unas atribuciones en su estado de formación, podrá también desarrollar su trabajo en otro estado de la Unión Europea. En este sentido, no se puede permitir que un ingeniero técnico español no tenga el mismo trato que su homólogo europeo.

**"Entendemos que un profesional formado en un estado firmante de los acuerdos de Bolonia y con unas atribuciones en su estado de formación, podrá también desarrollar su trabajo en otro estado de la Unión Europea"**

Según la sentencia del 9 de diciembre de 1999 del Tribunal de Luxemburgo, sala segunda, la decisión de la Comisión Europea de no admitir en el Grupo A de funcionarios a un ingeniero técnico español fue anulada, condenando además a la Comisión Europea al pago de las costas del procedimiento.

Y es el propio Estado Español el responsable de hechos como éste, al no permitir que puedan presentarse los técnicos españoles con una formación semejante a la de algunos países de la Unión Europea.

En este punto, debemos tener en cuenta que fue la propia sociedad quien creó los estudios técnicos para formar en principio a sus funcionarios, quienes, posteriormente, pondrían los conocimientos adquiridos al servicio de la sociedad. Hasta bien entrada la mitad del siglo XX muchos profesionales, al salir de las Escuelas Técnicas, ingresaban directamente en el ministerio correspondiente como funcionarios.

Con el tiempo, el número de profesionales que cada año se titulan es cada vez mayor, así como la complejidad de los trabajos que deben llevar a cabo. En este sentido, ha llegado un momento en que no sólo ofrecen su trabajo a la sociedad mediante la función pública, sino también dan respuesta a los particulares que requieren de sus servicios; estas personas o entidades valoran que sea un facultativo quien firme, y corrobore los trabajos que desean realizar, o bien están obligados por ley a hacer uso de estos profesionales.

En el momento actual en que nos encontramos, de proceso de conversión hacia los acuerdos de Bolonia, existen problemas no con los estudios, sino con las atribuciones de las que hemos

estado hablando. Por lo que se va intuyendo, parece ser que se pretende anular la Ley de Atribuciones de los Ingenieros Técnicos 2/82 (la única que trata íntegramente el tema y que fue aprobada por el Congreso de los Diputados y el Senado), por el atajo de crear infinitud de carreras técnicas y darles atribuciones, también repartidas infinitamente. Esto supondrá que posiblemente para un mismo trabajo hagan falta dos o más ingenieros de grado, o un "super ingeniero, con un gran paraguas" quien, por haber estudiado uno o dos años más, esté suficientemente preparado para asumir por sí solo las atribuciones de los distintos ingenieros de grado.

Este hecho implicaría que cada una de las diferentes especialidades técnicas no tendrían reflejo en la sociedad, así como la existencia de un gran número de estudios universitarios para los que, suponemos, no habrán suficientes alumnos, los que provocaría su desaparición.

La realidad es que la sociedad reclama ingenieros generalistas, que sean fácilmente reconocibles y reciclables respondiendo así a los numerosos cambios que acontecen en nuestra sociedad. Además, debemos optimizar los recursos destinados a la formación y conseguir que, con el menor coste posible (en años y euros), la universidad ofrezca la formación requerida por la sociedad en cada momento.

Desde nuestro punto de vista, una

buena alternativa sería la unificación de los primeros años de estudios entre las distintas especialidades. En la rama del conocimiento técnico que nos ocupa, se deberían incluir dos años comunes para todos, lo cual permitiría a los alumnos elegir más tarde su especialidad (forestal agrícola, industrial, obras públicas, aeronáutica, informática, minas topografía, etc.). En el tercer año de estudios se elegiría la especialidad de acuerdo con la actividad profesional elegida y teniendo en cuenta las atribuciones de la Ley 12/86. El cuarto año sería de especialidad académica, que en nuestro caso bien podrían ser las tradicionales de mecánica, electricidad, electrónica, química y textil, así como las de nueva creación: organización industrial, diseño industrial, etc.

De esta manera los alumnos podrían obtener la base de los estudios en un gran número de campus, ya que sería común a todos. En cuanto a las especialidades profesionales, cada escuela se centraría en unas determinadas enseñanzas y ofrecerían además, los másteres de investigación y especialización relacionados con ellas. Así se produciría una racionalización de los recursos que la sociedad destina a la formación.

**JUNTA DE GOBIERNO DEL  
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS  
TECNICOS INDUSTRIALES  
DE LA PROVINCIA DE ALICANTE**